

# **Conflictos mineros y transformaciones territoriales: Acerca del proyecto minero Las Bambas, Apurímac, Perú**

Avance de investigación en curso

Grupo de Trabajo N° 05: Desarrollo rural, globalización y crisis

Fabiola Espinoza Vergara  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos -Perú

## **Resumen**

El artículo presenta las transformaciones locales en comunidades y distritos del área de influencia directa del proyecto Las Bambas, producto de los impactos de la actividad minera en la zona. El análisis se efectúa sobre las discusiones teóricas de la ecología política y la perspectiva de transformación del conflicto. El objetivo central es analizar las dinámicas territoriales y políticas y en las provincias de Grau y Cotabambas desde la ejecución del proyecto (2004). Como resultados encontramos cambios producto de la convivencia entre los proyectos de las industrias extractivas y los pobladores locales que evidencian la transformación de “lo local” en condiciones de vida, la configuración del territorio y en la redefinición de las relaciones económicas y culturales de la zona.

**Palabras clave:** neoliberalismo, transformaciones territoriales, nueva minería.

## **1. Introducción**

La implantación de un nuevo modelo económico en América Latina (AL) durante los noventa transformó las dinámicas económicas y políticas de la región. Por esos años, las actividades extractivas concentrarían la mayor cantidad de inversiones extranjeras. En Perú, la expansión territorial y la mayor relevancia económica del sector minero crea nuevos imaginarios sobre el “deber ser” del desarrollo nacional.

El despliegue de la minería en territorios de tradición agrícola viene modificando los patrones de vida rurales. Comprender el proceso de esa transformación y cómo afecta a las tradiciones de desarrollo local posee gran relevancia puesto que permitiría entender la relación entre los cambios locales y la puesta en marcha de los procesos de neoliberalización a escala global y nacional, lo que a su vez posibilitaría la aprehensión del comportamiento de los actores y los conflictos suscitados entre ellos.

Algunos debates en la antropología ecológica consideran a estos cambios como parte del debilitamiento, transformación o desaparición de modelos de articulación social-y cultural- ligados a la vida comunitaria. Ponen énfasis en las transformaciones de la vida en comunidad desde el deterioro de los recursos naturales y los problemas de la convivencia entre comunidades campesinas y la actividad minera. La ecología política y otras corrientes desde la antropología analizan los conflictos y diversifican las respuestas de adaptación/resistencia de los actores bajo un escenario común de nuevo boom de inversiones y la participación histórica de países andinos en la actividad extractiva.

Con el objetivo de adentrarnos en los debates sobre industrias extractivas y transformaciones territoriales sobrevenidos en zonas donde la actividad minera se produce desde el boom minero-exploratorio post neoliberalización, este artículo describe lo encontrado en un estudio de caso sobre la minería en Perú. Nos referimos al proyecto Las Bambas y las transformaciones en las relaciones económicas, la configuración del territorio y los modos de vida de comunidades campesinas rurales a

consecuencia del desarrollo del proyecto. Además pretendemos evidenciar cómo se generan los conflictos mineros, en la convivencia entre proyectos de industrias extractivas y comunidades campesinas.

## **2. Sobre conflictos mineros y actividades extractivas**

Sobre la base de sus estudios en el altiplano Orlove (1980) enfatiza la importancia del cálculo consciente y del proceso de decisión de los actores; de esa forma, explica la interacción entre sociedad y entorno, y el posible cambio cultural en esa relación. Orlove examina las variaciones ocurridas en actividades individuales y grupales y las formas de interacción entre el comportamiento interno y las influencias externas. En su análisis, el medio ambiente no representa un ente pasivo, sino que interactúa con la acción humana. Esta perspectiva procesual permite comprender la ligazón entre los cambios medioambientales y el comportamiento de los actores, analizando los cambios en los modos de organización y en las relaciones de cooperación y conflicto.

Bebbington (2011) considera que los conflictos socioambientales actuales son también conflictos por el territorio, pues se cuestiona su gobernanza y se despliega una lucha entre comunidades, empresas, el Estado, ONG y otros. Estos actores dotan de sentido a los territorios en estrechos vínculos a las historias locales y dinámicas globales del capitalismo moderno. Así, el territorio es un ente socialmente producido y es desde los noventa que se instala una forma de ocupación y control del espacio que viene produciendo abruptas transformaciones en el medio rural. Propone una “ecología política de la transformación territorial en áreas afectadas por la minería” (2011:26). Las tierras ahora ocupadas por las mineras son territorios poseedores de significados culturales e históricos y representan el sustento de las comunidades que las habitan, por lo que -con el desarrollo de las actividades extractivas- estaríamos frente a dos enfoques opuestos del territorio: Uno que implica cambios paulatinos y la diversidad de actividades; y el otro, que significa drásticas alteraciones y ocasiona la ocupación espacial de un único actor, con lo que modifica de inmediato el tipo de intervención a realizar en el territorio, la distribución del poder y afecta la organización social local y la disponibilidad de recursos del presente y futuro.

La transformación de las condiciones de vida en las comunidades andinas de Grau y Cotabambas replantea, no solo una relación en las condiciones medioambientales, sino también en cuanto a las estructuras económicas, políticas y culturales comunales; de esa forma, comprendemos que los cambios en los escenarios locales se producen en estrecha relación a los cambios en el sistema-mundo y la distribución de poder global, de manera tal que en las localidades van resignificándose las estrategias de subsistencia y control del territorio y los recursos.

## **3. América Latina y la resaca neoliberal**

En las décadas de los ochenta y noventa se produce una serie de alteraciones en las estructuras económicas y políticas de la mayoría de países de América Latina. Ocurre una reestructuración de las economías, adoptándose reformas neoliberales alentadas por instituciones financieras internacionales sobre la base de las ideas del Consenso de Washington y que serían asumidas por los gobiernos de la región. De acuerdo a Bebbington tales reformas son parte de un proyecto económico, político e ideológico a la vez que promueve a toda costa la inversión privada y el fomento de la actividad primario-exportadora (2011:31)

Una de las consecuencias centrales de estas reformas fue la apertura de los mercados nacionales a las inversiones extranjeras directas. Durante los noventa, América Latina recepciona una “avalancha” de inversiones (De Echave *et. al.*, 2009). Los altos precios de los minerales, las nuevas tecnologías, las reformas institucionales y las altas tasa de crecimiento de China e India provocaron que la minería en

Latinoamérica concentre a las grandes inversiones internacionales. Así iniciaría el nuevo “boom minero” de la región. Lo novedoso radica en que ahora los actores centrales serían las empresas transnacionales y la gran minería.

De Echave (2005) considera que en esta etapa se producen dos cambios importantes en América Latina: si bien el sector minería se expandió en los denominados “países mineros tradicionales”, también se produjo una insólita actividad en nuevos países del área. Si bien la inversión creció en México, Chile, Perú y Bolivia; también lo hizo en Argentina, Ecuador, Venezuela, Honduras, Guatemala entre otros. En adelante, el sur concentraría los flujos de inversión extranjera. Por ejemplo, América Latina a inicios de los noventa recibía apenas el 12% de la inversión minera global, cinco años más tarde pasó a captar el 28% y a finales de la década e inicios de la actual alrededor del 33% (2005:02).

#### **4. Minería neoliberal a la peruana**

Al igual que la mayoría de países en América Latina y otras partes del mundo, el giro hacia dogmas neoliberales en Perú implicó una transformación significativa de sus estructuras políticas y económicas. Se pretendía abrir el mercado nacional a los capitales extranjeros, poner fin a las décadas de guerra civil del Perú, reducir la presencia del Estado en los asuntos económicos y sociales-nacionales y establecer un sistema de mecanismos autorregulados y más eficientes de oferta, demanda y determinación de precios (Bury 2007:82).

Mientras el país se encontraba una de sus mayores crisis económicas y sociales, los resultados de las elecciones de 1990 asignaban como ganador a Alberto Fujimori. El nuevo presidente, con el objetivo de estabilizar la economía y sociedad peruana, llevó adelante una política económica neoliberal dictaminada por organismos internacionales (sobre todo el Fondo Monetario Internacional). De esa forma, se inicia la creación de un nuevo marco jurídico-institucional y, a meses después del autogolpe del 5 de abril de 1992, se aprueba la Constitución de 1993 claramente inspirada en principios neoliberales como la promoción de la inversión privada, la flexibilidad laboral, entre otros.

La aprobación de Decretos Legislativos como el 662, 757, 708, entre otros, abre paso a una nueva ola de inversiones privadas, sobre todo en relación al petróleo, gas y minería en las regiones del interior del país. De esta forma, el neoliberalismo se adentraría a la economía y sociedad peruana, y, la década del noventa representaría el inicio de un nuevo ciclo de expansión minera. El liderazgo de la gran minería, asociado a la entrada de grandes corporaciones y al inicio de mega proyectos mineros en el Perú (v.g. Yanacocha, Antamina, etc.) sería una de las características centrales de este nuevo “boom minero”.

Entre los años 1991 y fines del 2000 el número de hectáreas vinculadas a la actividad minera se triplicó, pasando de 10 a 34 millones; de las últimas cifras, sólo un tercio correspondía a concesiones vigentes (Glave y Kuramoto 2002). Para mediados del 2008, las concesiones mineras en Perú sumaban más de 16 millones de hectáreas (De Echave, 2008: 01). De acuerdo a Zegarra, en los noventa también se produciría la expansión de la minería a nuevas regiones del país: se pasaría de las zonas mineras por excelencia-zonas altoandinas- a regiones como valles agrícolas de la costa o de la región quechua en los que hasta entonces no se efectuaba actividad minera (2006:09).

La cantidad de inversiones en el rubro de minería llegó a sumar 7,450 millones de dólares entre 1992 y 2004, lo que permitió que en los últimos quince años el país atravesase el largo ciclo de incremento de los precios de los minerales recaudando niveles de impuestos a la renta sin precedentes, que permitieron elevar la presión tributaria al 15% del PBI en el 2006, mientras que –durante ese mismo año- las exportaciones mineras llegaron a US\$ 14,465 millones (De Althaus 2007:18). De otro lado, la producción minera generó un crecimiento macroeconómico impresionante: la tasa de crecimiento económico alcanzó, especialmente en los últimos años, cifras alrededor del 8% del PBI.Y

mientras se intensificaba el nivel de producción minera, el valor de las exportaciones mineras se incrementaba (Damonte 2009).

A pesar de las descomunales cifras, existen fuertes críticas a la forma de crecimiento económico imperante. Para Gonzales De Olarte (2007), desde los noventa en adelante, se produce un crecimiento económico sectorial selectivo: mientras en un mismo periodo el sector agrícola ha crecido en 2.2%, la minería lo hizo en 34.6% y la manufactura a 13.9%. Por estas razones –para Gonzáles De Olarte- el empleo ha tenido un comportamiento segmentado, la pobreza apenas ha retrocedido y la desigualdad sigue persistente. De otro lado, Bury (2007) considera que la transformación neoliberal peruana ha sido distribuida de modo desigual, razón por la que las cifras más altas de pobreza, analfabetismo y falta de cobertura de servicios básicos, se ubican en la sierra rural producto de que el crecimiento económico se ha concentrado a en la costa peruana y en sus principales centros urbanos.

Han sido significativas las consecuencias de las reformas de los noventa en el país. De acuerdo a Bury “la economía peruana está actualmente dominada por el sector privado, regulada por fuerzas de mercado e intrincadamente vinculada con la economía mundial” (2007: 56).

#### **a. Nuestra nueva minería**

Durante la primera mitad del siglo XX la mayoría de conflictos alrededor de la actividad minera en Perú se producían por los desencuentros entre las empresas y los sindicatos mineros. Durante los noventa, la liberalización del mercado nacional y el desarrollo tecnológico en la industria minera permitió a las empresas contar con menor número de trabajadores y ejecutar proyectos más ambiciosos y rentables. Sin embargo, la contaminación y otros problemas generados producirían un nuevo lote de conflictos, ahora con las comunidades aledañas a las zonas de operaciones. Este escenario provocaría que las empresas adopten una nueva estrategia que logre demostrar que la actividad minera también favorece a las localidades y de esa forma lograr contrarrestar las hostilidades de la población hacia las industrias extractivas (Arellano 2011).

De forma que, a la par de los procesos de neoliberalización de la economía peruana se fundaría la idea de una “nueva minería” socialmente responsable y coherente con el desarrollo local. Esta estrategia se efectuó bajo dos formas: las empresas realizarían una mayor distribución de ingresos a las localidades donde operan y mayores inversiones en la responsabilidad social empresarial y creación de proyectos de desarrollo. Para Javier Arellano, la versión peruana de lo que él denomina la “Nueva Estrategia de Industrias Extractivas” conllevó a que durante los 2000 se produjesen algunas modificatorias en la política minera nacional: Cambio de las reglas de distribución del canon minero<sup>1</sup>, la creación del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo<sup>2</sup> (PMSP) desde el 2006 y -como lo ocurrido en el proyecto Las Bambas- la creación de fondos de fideicomiso.

### **5. Apurímac y los cóndores de cobre**

La región Apurímac alberga una población de 438 782 habitantes (INEI, 2007). El 70,3% de la población vive en pobreza, mientras que el 40,3% vive en la pobreza extrema<sup>3</sup>. Para el 2009, Apurímac ocupaba el segundo lugar tanto en pobreza como en pobreza extrema, solo antecedido por Huancavelica. El IDH de esta región la ubica en el puesto 23, uno de los más bajos del país. La

<sup>1</sup> Se han producido muchos debates sobre la ley del canon en el Congreso a lo largo de la década del 2000. Quizá la modificatoria más representativa fue la del 2002, en la que se otorgaba el 50% del impuesto a la renta a las arcas de los gobiernos regionales y locales.

<sup>2</sup> Coloquialmente conocido como Óbolo minero

<sup>3</sup> Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Niveles de Vida y Pobreza (ENAH) del 2009.

educación superior alcanza solo al 16.4% de la población total, mientras que la población analfabeta representa el 21,7%.

Las provincias del área de influencia de Las Bambas son Grau, con 25, 090 habitantes aprox. y Cotabambas, con 45,771 habitantes aprox<sup>4</sup>. En las comunidades campesinas-ubicadas entre los 3000 y 4650 msnm- las tierras agrícolas son escasas, sin embargo -desde sus orígenes- la agricultura y la ganadería han sido los principales medios de subsistencia hasta antes de la ejecución del proyecto Las Bambas. La producción agrícola de la zona se caracteriza por realizarse en pequeña escala: el 92% de los productores utilizan menos de cinco hectáreas en sus sembríos. Además de la agricultura y ganadería, los habitantes de estas zonas practican el intercambio de productos o pequeño comercio entre las diferentes zonas agrícolas.

Apurímac no representa un centro minero destacado o de larga historia. A lo sumo, en las décadas pasadas en la región se produjo minería en menor escala. Por ejemplo, cerca del distrito de Progreso, la empresa Cochasyhuas Mining Company desarrolló -hasta 1952- actividad minera aurífera. Esta actividad tuvo cierto impacto en el medio ambiente y en la organización de la vida de los lugareños. Desde el retiro de la empresa hasta la actualidad, en la zona permanece la actividad minera en forma artesanal (Gouley 2005:25). Si bien los pobladores de la provincia de Grau están más familiarizados a la actividad minera, en la provincia de Cotabambas la minería es un fenómeno relativamente nuevo.

A más de una década del nuevo “boom minero” en el país, Apurímac se ha convertido en un lugar que concentra grandes inversiones mineras. Actualmente la región es escenario de múltiples proyectos de explotación y exploración de yacimientos. Para el año 2010 las áreas de concesión minera en la región representarían el 55% del total del territorio, siendo la provincia de Cotabambas la que presenta mayor parte de su territorio concesionado (68,77%)<sup>5</sup>

## 6. El mega proyecto minero Las Bambas

Las Bambas comprende los yacimientos de Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas, con un área concesionada de 33,200 hectáreas (Cuadros et al 2005:11). En su área de influencia, Las Bambas abarca 49 comunidades que se ubican entre los distritos de Progreso y Huayllati (provincia de Grau) y Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui (provincia de Cotabambas). De esas 49 comunidades, 6 poseen terrenos en el área concesionada: comunidades campesinas de Fuerabamba, Huancuire, Pamputa, Chicñahui, Pumamarca y Cconccacca.

Los yacimientos de este proyecto fueron descubiertos en 1911 por la empresa Ferrobamba Ltda., que abandonó las concesiones en 1934. Durante las décadas siguientes se realizarían varios estudios geológicos y perforaciones en la zona. Sería recién desde 1970, bajo el autodenominado “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas”, que el Estado peruano pasaría a administrar de los yacimientos. Hasta esa fecha, se extraía oro y cobre en forma artesanal en las zonas de Ferrobamba, Charcas y Progreso (todavía se pueden observar los antiguos lavaderos de oro en la zona). Para el año de 1991, bajo la administración de Alberto Fujimori, los yacimientos serían convertidos en 21 concesiones mineras (Gouley 2005:14)

Este proyecto cuenta con reservas probadas de 40,5 millones de toneladas, con leyes de más de 2% de cobre y un potencial de exploración por encima de los 500 millones de toneladas (De Echave *et al* 2009:152). Estas características hacen de Las Bambas un megaproyecto comparable a Antamina “la nueva Antamina” (Gouley 2005).

Desde el discurso del Estado y el sector privado, el proyecto Las Bambas se erigía como un nuevo paradigma de minería en Perú: Los altos niveles estimados de producción, la gran cantidad de inversión

<sup>4</sup> Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda, INEI

<sup>5</sup> Fuente: CooperAcción. Disponible en <<http://www.cooperaccion.org.pe/Apurimac.html>> [fecha de consulta: 04 de abril del 2013]

realizada y –sobre todo- la importancia otorgada a la promoción del desarrollo local debería fundar una nueva versión de la minería. El diseño adoptado en este proyecto reivindica la extracción de recursos junto con la responsabilidad social de la empresa para con las poblaciones locales y se establecen acuerdos innovadores entre el Estado y la empresa. Por ejemplo, en las bases del concurso se añadió el denominado “aporte social del proyecto”, las regalías flat y el anexo K “condiciones sociales para la explotación del Proyecto Las Bambas”. Sin embargo, no todo es color de rosa.

### **a. Proceso de transferencia del proyecto**

El proceso de transferencia de Las Bambas inicia en agosto del 2003 cuando ProInversión convoca a las empresas interesadas en precalificar al Concurso Público Internacional PRI-80-2003 del Proyecto Las Bambas. En aras de alentar el proceso, entre setiembre y octubre del 2003 algunos alcaldes distritales, el Gobierno Regional de Apurímac, el MINEM y ProInversión firman acuerdos expresando su apoyo al proceso de licitación del proyecto (De Echave *et al* 2009:151). Estos acuerdos consideraban que la ejecución del proyecto deberá respetar las actividades agropecuarias, preservar el medio ambiente, las costumbres locales y responsabilidad social.

La primera subasta del proyecto fue programada para el 25 de junio del 2004; sin embargo, en repetidas ocasiones se postergaron los plazos producto de desacuerdos entre pobladores locales, ProInversión y el Gobierno Regional. Mientras tanto, en el periodo de mayo a agosto del mismo año, ProInversión en coordinación con el MINEM y los Gobiernos locales organizaron Audiencias públicas cuyo objetivo era informar a la población sobre los beneficios que traería el proyecto. Se acuerdo a De Echave *et. al.*, si bien las audiencias permitieron transferir información especializada sobre el proyecto, el lapso de tiempo utilizado para todo el proceso fue muy corto, lo que ocasionó que no se pueda procesar toda la información y que gran parte de la población cuestione la legitimidad del proceso por las escasas posibilidades de incidir en él (2009:151).

“Todo el pueblo está en contra de la subasta. Muchos dicen “No a la minería” y otros, como nuestro grupo queremos que se postergue, que el gobierno dé más información y se haga una consulta popular”. Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Apurímac, Juan Amache<sup>6</sup>

“[la firma del contrato de Las Bambas] lo recordamos como un acto algo así discreto, casi a espaldas de todos los cotabambinos. [...] a consecuencia de eso vienen los paros, el rechazo a la minería, todo” Percy Mendoza, profesor, Tambobamba (Entrevista N° 06, realizada el 21 de diciembre del 2012).

A través de comunicados públicos tanto el Frente de Defensa de los Intereses de Apurímac, la Federación Provincial de Comunidades campesinas y Pueblos indígenas de Cotabambas, como la CORECAMI expresaban sus principales demandas, las cuales giraban en torno a la postergación del proceso de licitación, la realización de una consulta popular, la mayor presencia de organismos defensores de derechos humanos y otros afines (Gouley 2005:35)

Con todo, el 31 de agosto del 2004 se realiza la subasta pública resultando ganadora Xstrata AG Suiza que realizó una oferta de US\$ 121 millones de dólares. El 1 de octubre se firmaría el contrato entre el Estado peruano y la empresa. En dicho contrato se estipulaba que la empresa debería entregar 91 millones de dólares, de los cuales el 50% (US\$ 45,5 millones) corresponde al aporte social inicial que se destinaria a la zona de influencia y deberá ser incrementado en US\$ 13,5 millones adicionales cuando la empresa decida dar inicio al proceso de explotación<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Fuente: Reuters citado en Perú 21, 30 de agosto del 2004. Disponible en: <<http://peru21.pe/noticia/45440/gobierno-listo-vender-proyecto-cobre-bambas>> [revisado el 15 de noviembre del 2012]

<sup>7</sup> Fuente: ProInversión. Disponible en

El monto entregado por Xstrata -como parte de su estrategia para la obtención de “licencia social”- pasó a ser administrado por un Fondo de fideicomiso<sup>8</sup> cuyo consejo de Administración estaba compuesto por los gobiernos locales, ProInversión y la empresa. Los beneficiarios de ese monto serían las provincias de Grau y Cotabambas, en total 20 distritos y 80,552 habitantes. Bajo este escenario, Sin embargo, para De Echave *et. al.*(2009) luego del proceso de transferencia y el inicio de la ejecución del proyecto, continuó un modo de trabajo en el que las acciones descoordinadas crearon mayores distancias entre los diferentes actores involucrados. En paralelo, Xstrata dio inicio a la exploración y comenzó a establecer relaciones bilaterales con las diferentes comunidades de la zona lo que –como veremos- con el tiempo generaría otros conflictos.

## 7. Actores, escenarios y transformaciones locales

Expectativas y temores se conjugaban alrededor de los cuestionamientos de las comunidades sobre cómo impactaría la minería a sus modos de vida. La brevedad y limitaciones del proceso de transferencia no permitieron disuadir esas dudas. En esta etapa, el Gobierno central -a través del MINEM- tuvo una participación limitada, además el incumplimiento de los acuerdos, la inasistencia a reuniones pactadas provocaron nuevas fricciones con la población.

Gouley considera que la desinformación y el temor se acrecentaron por el clima general de desconfianza acerca de la minería y sus posibles impactos (2005:20). De igual forma, De Echave *et. al.* (2009) señala que en el proceso de transferencia se suscitaron opiniones encontradas: de un lado existía gran expectativa por los beneficios que generaría la mina; como también, existían sentimientos de exclusión de la población al carecer de información.

En las entrevistas realizadas a autoridades locales de Tambobamba, Coyllurqui y Challhuahuacho, existe consenso en considerar que durante el proceso de transferencia se sobredimensionaron las virtudes del proyecto lo que generó sobreexpectativas por los posibles beneficios que traería. Según las entrevistas, quienes se encontraban a favor del proyecto minero lo hacían “con la esperanza de que ellos o sus hijos puedan alcanzar un empleo, que hayan mejores servicios en la zona, que se apoye al agro, la educación” (Percy Mendoza, profesor, Tambobamba, entrevista N° 6, realizada el 21 de diciembre del 2012).

Durante el proceso de transferencia, exploración y construcción, la estrategia desplegada por Xstrata desarrolló herramientas de apertura al diálogo. La empresa buscaba llegar a acuerdos conversando directamente con las comunidades y-hasta la actualidad- la oficina de relaciones comunitarias prioriza su atención en las localidades más cercanas a los campamentos, como son el distrito de Challhuahuacho y la c.c. de Fuerabamba (próxima a ser reubicada).

Challhuahuacho concentra la mayor cantidad de obras de infraestructura y proyectos de desarrollo de toda la zona de influencia. Esto ha propiciado un sentimiento generalizado de exclusión por parte de las comunidades más alejadas como Tambuylla, Choquecca, distritos de Coyllurqui, Cotabambas y Tambobamba, puesto que consideran que los compromisos asumidos por la empresa y el Estado no se han cumplido.

“la distribución económica no está equilibrada, hay un déficit entre todos los distritos. Por ejemplo, quien más se beneficia es Challhuahuacho, incluso que Haqira está más cerca, casi como Challhuahuacho” Alcalde de Haqira, entrevista N° 8 realizada el 30 de diciembre del 2013

Challhuahuacho -sobre todo desde el proceso de construcción- ha visto reorientadas sus actividades económicas; así, ha pasado de la pequeña agricultura y ganadería hacia la prestación de

---

<<http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaFichaHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1782>> [revisado el 12 de octubre del 2012]

<sup>8</sup> Los fideicomisos son fondos que aporta una empresa cuando adquiere la concesión de un yacimiento. El mundo del fideicomiso es arbitrario y es para uso exclusivo del desarrollo local.

servicios (lavandería, hospedajes, restaurantes, transporte, etc.). Esto ha generado que las actividades económicas realizadas históricamente en la zona queden relegadas por ser de menor rentabilidad y que los flujos económicos se concentren en actividades comerciales. A consecuencia de estos procesos, se han redefinido los modos de vida de comunidades campesinas antes dedicados exclusivamente a la agricultura y ganadería. Al cambiar las relaciones económicas, cambian también las representaciones simbólicas que los habitantes construyen de los territorios que habitan. El trabajo de campo permitió comprobar que -actualmente- productos de pan llevar consumidos en la zona desde el desarrollo de la actividad minera son transportados desde ciudades como Cuzco, Arequipa o Abancay.

En las entrevistas realizadas constatamos que existe incertidumbre sobre el futuro de las actividades económicas en Challhuahuacho. Personal de Xstrata ha informado a la población que en el 2014 culminará la etapa de construcción, y, las empresas –que son los principales demandantes- no requerirán de los servicios ahora brindados por los comercios del distrito.

La comunidad de Fuerabamba está próxima a ser desplazada. Según las conversaciones sostenidas con el ingeniero Pillco (Xstrata) la empresa planea el traslado definitivo para diciembre del presente. Esta información ha sido difundida entre la población aunque aún existe cierta incertidumbre sobre el traslado. En un principio, la comunidad de Fuerabamba y otras vecinas no aceptaban el desplazamiento y reubicación debido a la alta valoración cultural de sus tierras (De Echave *et. al* 2009:160) pero en el 2008 se produjo la negociación de tierras, que osciló entre la entrega de dinero y la compra de nuevas tierras para cada familia.

En actualidad se vienen presentando algunos problemas de contaminación. Según los pobladores de Challhuahuacho el movimiento de tierras en el proceso de construcción en la zona de Chus´piri ha producido la extinción de truchas en el río. Asimismo, existe la incertidumbre sobre el futuro y los posibles problemas sobre el manejo del agua.

Otro cambio acaecido en la zona es la expansión de la actividad minero-artesanal en varias comunidades colindantes al proyecto Las Bambas. El desarrollo de la minería artesanal se explica por los altos precios del cobre en el mercado internacional y por la actividad de la gran minería en la zona. La minería artesanal, si bien en zonas como Fuerabamba y Progreso viene desde décadas anteriores, en comunidades como Pamputa, Ñahuinlla, Huncuire y Pallparo es una actividad nueva, que data de hace solo 3 años atrás. En estas comunidades altoandinas -caracterizadas por la pobreza extrema- la minería artesanal ha dinamizado las economías locales elevando el nivel de ingreso per cápita. De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente del distrito de Coyllurqui, Daniel Bustos, los mineros artesanales de la zona tendrían un ingreso aproximando de 200 y 500 soles diarios.

## **8. Reflexiones finales**

Como mencionábamos al inicio, Las Bambas presentaba elementos innovadores sobre la relación de la minería con la población local. Sin embargo, los problemas generados en las diferentes etapas del proyecto evidencian la fragmentación de los arreglos en torno al uso del espacio que, sumado a la presencia de nuevos agentes y percepciones sobre recursos y territorio, produce cambios en los modos de vida local.

Además notamos que uno de los principales actores en los conflictos mineros actuales son las comunidades campesinas, puesto que es a ellas a quienes más afectan los cambios producidos por la actividad de la gran minería. Como otros estudios revelan (Gil 2009, Arellano 2013) en la zona se han modificado las actividades económicas centrales debido a la injerencia de la actividad de la gran minería. Para el caso de Grau y Cotabambas se presentan nuevas dinámicas económicas, específicas según el distrito o la comunidad a la que se refiera.

Hasta nuestros días el Perú posee un marco institucional cuyo objetivo central es la promoción de la inversión privada. Los gobiernos sucesivos al de Alberto Fujimori se caracterizan por continuar la



“larga noche neoliberal”; así, el actual gobierno de “la gran transformación” requiere de crecimiento económico sostenido, que-en este contexto- implica mantener una política de promoción de inversiones y garantizar la apertura del mercado nacional. Bajo tales condiciones resulta difícil que desde el Gobierno Central se quiera debatir temas trascendentales en relación a las actividades extractivas, como es el hecho de poner en tela de juicio el modelo de desarrollo imperante.

## 9. Bibliografía

- Arellano, J (2011) ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos- Fondo Editorial PUCP
- Bebbington, A. (2011) Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras. En A. Bebbington (ed.) Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de las transformaciones territoriales (2° ed.), Lima: Instituto de Estudios Peruanos-CEPES.
- \_\_\_\_\_ (ed) (2013) Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas territoriales, Lima: Instituto de Estudios Peruanos-CEPES.
- Bury, J. (2007) Neoliberalismo, minería y cambios rurales en Cajamarca. En A. Bebbington (ed.) Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de las transformaciones territoriales (2° ed.), Lima: Instituto de Estudios Peruanos-CEPES: pp.49-80.
- Cuadros J., Consiglieri J. y De Echave J. (2005), Mapeo de la situación social e institucional del proyecto Las Bambas, Lima: Cooperación.
- Damonte, G. (2009) Ciencias sociales y gran minería: una agenda de investigación. En G. Damonte, N. Fuller y M. Valcárcel. Minería, turismo y agroindustria: nuevos ejes económicos, Lima: GRADE pp. 7-32.
- De Althaus, J. (2007) La revolución capitalista en el Perú. Lima: Fondo de Cultura Económica.
- De Echave, J. (2008) Diez años de minería en el Perú, Lima: CooperAcción
- De Echave, J., Diez, A. Huber, L., Revesz, B., Ricard, X. y Tanaka, M.(2009). Minería y conflicto social, Lima: Centro Bartolomé de las Casas, CIPCA e IEP.
- De Echave, J.,Torres, V. (2005) Hacia una estimación de los efectos de la actividad minera en los índices de pobreza en el Perú, Lima: CooperAcción- Acción Solidaria para el Desarrollo.
- Gil, V (2009) Aterrizaje minero: Cultura, conflicto, negociaciones y lecciones para el desarrollo desde la minería en Áncash, Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos
- Glave, M. y Kuramoto, J. (2002) Minería, minerales y desarrollo sustentable en Perú, Lima, Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), en Minería, minerales y desarrollo sustentable en América del Sur, Ottawa:IDRC Books
- Gonzales de Olarte, E. (2007) La descentralización: una oportunidad que se puede perder. En Revista Coyuntura, análisis económico y social de la actualidad. Lima: CISEPA, año 3 (12)
- Gouley, C. (2005) Conflictos mineros, interculturalidad y políticas públicas: El caso de Las Bambas, Apurímac. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas.
- Orlove, B (1980) Ecological anthropology. Annual Review of anthropology 9: 235-273.
- Zegarra, E. y Vane, P. (2006) Gasto público, productividad e ingreso rural en los países de la comunidad andina: un análisis de determinantes e impactos. En Soto, F., Santos, J. y Ortega, J. Políticas públicas y desarrollo rural en América Latina y el Caribe: el papel del gasto público: FAO. P. 223-248.